



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2018-50936407-APN-JGM RESOL JGM RECHAZO PEDIDO BRIZUELA RUBEN DAMIAN PARLASUR

VISTO el Expediente N° EX-2018-50936407-APN-JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Leyes Nros. 23.981, 24.560 y 27.120, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante IF-2018-50940657-APN-JGM, con fecha 10 de octubre de 2018, el señor D. Rubén Damián BRIZUELA (D.N.I. N° 31.310.146) presentó una nota en la cual alega haber asumido la suplencia del cargo de Parlamentario del Mercosur por el Distrito Regional Catamarca a partir del 10 de diciembre de 2017, indicando que en su opinión, desde que se encuentra ejerciendo el cargo de Parlamentario del MERCOSUR le resulta aplicable lo establecido en el artículo 16 de la Ley N° 27.120, intimando al titular de la Jurisdicción al pago de dieta, viáticos y demás conceptos relativos al ejercicio de dicho cargo.

Que en sustento de su pedido invoca las disposiciones de la Ley N° 27.120, en cuanto establece en su artículo 16: *“En todo lo que no estuviese previsto por el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur o no se regulara específicamente por los organismos competentes, los parlamentarios del Mercosur en representación de la ciudadanía argentina, serán asimilados en el derecho interno a los diputados nacionales. Serán aplicables a su respecto, siempre que no hubiere disposición específica, las disposiciones que regulan la condición de aquéllos en cuanto a inmunidades parlamentarias, regímenes remuneratorios, laborales, previsionales y protocolares”*.

Que considera que lo dispuesto en el artículo 43, inciso d) del Reglamento Interno del Parlamento del MERCOSUR, en cuanto dispone que corresponde a la Mesa Directiva de dicho Parlamento el resolver acerca del reembolso de gastos y el pago de remuneración de los Parlamentarios, no desplaza la aplicación de la Ley N° 27.120 en los términos de su artículo 16.

Que recuerda que la Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur no ha establecido ninguna disposición respecto de las remuneraciones de los parlamentarios, fijando el presupuesto del rubro en CERO (0) y que la Ley N° 27.198 es posterior al dictado del Reglamento Interno del Parlamento del Mercosur.

Que, según el requirente, la Ley N° 27.120 fue dictada con posterioridad a la constitución del Parlamento del MERCOSUR y al dictado de su reglamento interno y sostiene que la Decisión Administrativa N° 152

del 3 de marzo de 2016 implica el reconocimiento de su postura, en tanto por medio de esta última norma el PODER EJECUTIVO habría reconocido la falta de una regulación específica y hace reserva de cuestionar la Decisión Administrativa N° 152/16 por considerar inconstitucional en tanto se equipara a los Parlamentarios del Mercosur a los empleados de la Administración y no con los Diputados Nacionales.

Que, plantea subsidiariamente que en caso de no resultar aplicable la Ley N° 27.120, el titular de la Jurisdicción tiene facultades suficientes para transferir al Parlamento del Mercosur las partidas que resulten necesarias para realizar el pago de las remuneraciones y todos los demás importes que por cualquier concepto les correspondan a los parlamentarios en general y al presentante en especial.

Que por la Ley N° 23.981 la República Argentina aprobó el TRATADO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN MERCADO COMÚN ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, suscripto en la ciudad de Asunción (REPÚBLICA DEL PARAGUAY), el 26 de marzo de 1991, que consta de VEINTICUATRO (24) artículos y CINCO (5) Anexos y en su artículo 10 prevé que *“El Consejo es el órgano superior del Mercado Común, correspondiéndole la conducción política del mismo y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos para la constitución definitiva del Mercado Común”*.

Que, asimismo, por la Ley N° 24.560 se aprobó el “Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur” -Protocolo de Ouro Preto-, suscripto entre las mismas partes en Ouro Preto, REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, el 17 de diciembre de 1994, que consta de CINCUENTA Y TRES (53) artículos y UN (1) Anexo.

Que este Protocolo Adicional, en su artículo 32, regula las funciones de la Secretaría Administrativa del Mercosur, previéndose en el inciso III que le corresponde: *“Organizar los aspectos logísticos de las reuniones del Consejo del Mercado Común, del Grupo Mercado Común y de la Comisión de Comercio del Mercosur y, dentro de sus posibilidades, de los demás órganos del Mercosur, cuando las mismas se celebren en su sede permanente. En lo que se refiere a las reuniones realizadas fuera de su sede permanente, la Secretaría Administrativa del Mercosur proporcionará apoyo al Estado en el que se realice la reunión”*.

Que el artículo 45 del mismo cuerpo normativo establece que *“La Secretaría Administrativa del Mercosur contará con un presupuesto para atender sus gastos de funcionamiento y aquellos que disponga el Grupo Mercado Común. Tal presupuesto será financiado, en partes iguales, por contribuciones de los Estados Partes”*.

Que por otra parte, el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur aprobado por la Ley N° 26.146, prevé en su artículo 20 lo siguiente: *“1. El Parlamento elaborará y aprobará su presupuesto, el que será solventado con aportes de los Estados Partes, en función del Producto Bruto Interno y del Presupuesto nacional de cada Estado Parte. 2. Los criterios de contribución de los aportes mencionados en el inciso anterior, serán establecidos por Decisión del Consejo del Mercado Común, tomando en cuenta la propuesta del Parlamento”*.

Que la precitada norma, en su artículo 11 detalla como requisitos e incompatibilidades: *“1. Los candidatos a Parlamentarios deberán cumplir con los requisitos exigibles para ser diputado nacional, según el derecho del Estado Parte respectivo. 2. El ejercicio del cargo de parlamentario es incompatible con el desempeño de un mandato o cargo legislativo ejecutivo en los Estados Partes, así como con el desempeño de cargos en los demás órganos del MERCOSUR. 3. Serán aplicables, asimismo, las demás incompatibilidades para ser legislador, establecidas en la legislación nacional del Estado Parte correspondiente”*.

Que de lo expuesto se concluye que la financiación de las actividades de los órganos del MERCOSUR tiene un régimen específico, al que los Estados Parte contribuyen de acuerdo a las cuotas y mecanismos que en cada caso se establece.

Que de ninguno de los instrumentos citados surge que los parlamentarios del MERCOSUR tengan facultades de requerir a los países miembro, ningún tipo de contribución para sustentar las actividades oficiales del MERCOSUR o de sus órganos, debiendo respetarse la autonomía presupuestaria de los órganos del MERCOSUR y la forma de contribuir a los mismos que han pactado los Estados Miembros.

Que con relación a un planteo similar se expidió el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo N° 3 en autos “*Gil Lozano, Claudia Fernanda c/ E.N. S/ amparo Ley 16.986*”, decidiendo lo siguiente: “*Que, en los términos en que la controversia ha quedado planteada, lo cierto es que, frente a lo establecido en el art. 20 de la ley 26.146, mediante la que se aprobó el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, dotándolo en función de ese artículo de presupuesto, no encuentro justificada la existencia de una omisión arbitraria del Estado nacional con respecto al pago de las remuneraciones y el reembolso de gastos de la accionante*”.

Que los precitados acuerdos interestaduales no asignan a los Estados Miembro facultades para determinar los niveles retributivos de los Parlamentarios del MERCOSUR, aunque hubieran sido elegidos en su territorio, ni precisan que los importes que se pudieran abonar a dichos parlamentarios resulten susceptibles de ser deducidos de las cuotas fijadas como aporte del Estado por acuerdo con sus pares.

Que, en consecuencia, corresponde desestimar el pedido formulado por el señor D. Rubén Damián BRIZUELA, dado que no corresponde abonar suma alguna a simple requerimiento de los parlamentarios del PARLASUR en materia de remuneraciones o viáticos, en tanto la forma de contribuir a los gastos del PARLASUR tiene un régimen especial que debe ser respetado, tal como se desprende de lo dispuesto en la normativa antes citada.

Que, tampoco podría el Jefe de Gabinete de Ministros “transferir partidas” del presupuesto nacional a una persona de derecho público internacional distinta de la República Argentina, como es el Mercosur, dado que excedería en forma manifiesta sus atribuciones.

Que mediante IF-2018-53318684-APN-DGAJ#JGM e IF-2019-41976589-APN-DGAJ#JGM, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado intervención.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 103 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, 30 de la Ley N° 19.549 y 8° del Decreto N° 977 del 6 de julio de 1995 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Recházase el pedido formulado por señor D. Rubén Damián BRIZUELA (D.N.I. N° 31.310.146) relacionado con el pago de dieta, gastos de representación, desarraigo, subsidios, becas y demás conceptos que en su criterio derivarían de su condición de Parlamentario del PARLASUR, por las razones expuestas en los Considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber que lo resuelto agota la instancia administrativa en los términos del artículo 31 de la Ley N° 19.549.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese y archívese.

